



Violencia en Colombia

ALVARO TIRADO MEJIA *

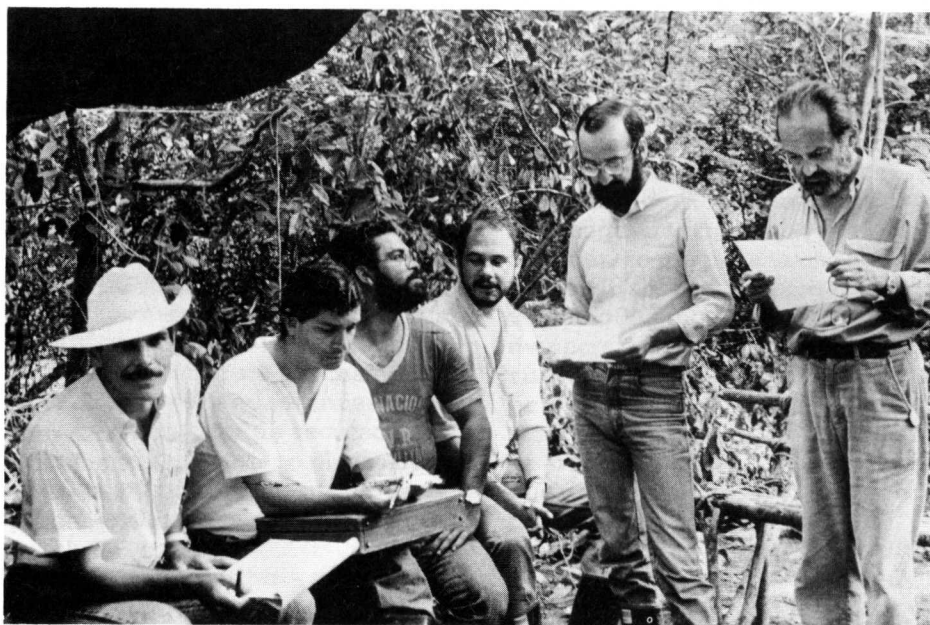
Por la democracia,
más democracia.



PARA muchos observadores nacionales y extranjeros, la extraordinaria magnitud de la violencia que vive Colombia, tanto en la modalidad directamente política como en las otras formas, resulta un fenómeno bastante paradójico. En efecto, durante los últimos treinta años, el país ha sido gobernado por regímenes civiles aunque con restricciones a la democracia. En ese mismo período se ha dado un desarrollo económico comparativamente mayor que el de casi toda Latinoamérica y más constante que ninguno ya que no se han presentado disminuciones del producto bruto interno ni siquiera en los momentos más críticos por los que han atravesado las economías del continente. La sociedad se ha modernizado aceleradamente llegando a ser predominantemente urbana (cerca del 70%). La educación se ha incrementado a un ritmo muy acelerado en todos los niveles y el incremento demográfico ha disminuido en esas tres décadas más que en cualquier otro país latinoamericano.

→

* Profesor titular y emérito de la Universidad Nacional. Consejero Presidencial para los Derechos Humanos



Carlos Pizarro y Rafael Pardo: claras reglas del juego.

→

Sin embargo, mientras en casi todas partes los movimientos guerrilleros que proliferaron después de la revolución cubana se terminaron de una u otra manera, en Colombia han persistido y aunque no tienen la menor posibilidad de lograr una victoria decisiva, desempeñan un papel perturbador en el orden público, la economía y la estabilidad del Estado que sería absurdo desconocer.

Han multiplicado sus frentes y sus efectivos y están presentes en gran parte del territorio nacional, desde las lejanas zonas de colonización donde es muy débil o inexistente la acción del Estado, hasta regiones de primera importancia económica en el interior de la frontera agrícola.

Violencia social

Mucho mayor por el número de las víctimas es la llamada violen-

cia social, la que produce la delincuencia común y la que se deriva de las actividades del narcotráfico. Más grave como amenaza para la democracia y la vigencia de los derechos humanos es la violencia que se ejerce—principalmente, pero no exclusivamente, por parte de grupos de extrema derecha—contra dirigentes políticos de todos los partidos aunque un número significativo de víctimas pertenece a la Unión Patriótica; contra sindicalistas, maestros y profesores, contra periodistas e intelectuales, defensores de los derechos humanos; contra jueces y magistrados, muchos de los cuales han sido asesinados, otros han tenido que abandonar el país o dejar sus cargos ante las amenazas de muerte. En 1988 se han producido varias decenas de masacres selectivas unas—con lista previa de las víctimas—y otras indiscriminadas dirigidas contra

poblaciones en las que la izquierda tuvo buenos resultados electorales, como si se tratara de aterrorizar regiones enteras a causa de su composición política.

Una violencia de semejante magnitud, —las cifras difieren, según las fuentes, pero las que podríamos considerar oficiales son de todos modos extraordinariamente elevadas— no corresponde en absoluto a un propósito del gobierno, de liquidar a la oposición política. Por el contrario casi todos los observadores extranjeros y los investigadores relativamente imparciales dentro del país reconocen los esfuerzos de la administración por ampliar la democracia, erradicar los principales factores de violencia y garantizar los derechos humanos.

Guerra limitada

Si se quiere apreciar el fenómeno de la violencia en la última dé-



cada en toda su complejidad hay que agregar que Colombia no es una sociedad polarizada entre fuerzas de extrema derecha y de extrema izquierda. Estas fuerzas existen evidentemente y están presentados por una parte en las guerrillas y quienes las apoyan y por otra en los grupos paramilitares y los sectores que los inspiran y financian. Pero es muy claro que la inmensa mayoría de la población no aspira al triunfo definitivo de uno de estos contrincantes, ni menos aún a que impongan los modelos de sociedad que su ideología y sus formas de actividad llevan implícitos. Casi todos los colombianos quieren la paz y la democracia en una versión más o menos ampliada y participativa, más o menos reformista. Son en realidad muy pocos los que desean una dictadura de derecha o de izquierda. Tanto es así que los dos actores mencionados, a pesar del contenido real de sus actividades, se presentan a sí mismos como adalides de la paz y de la democracia porque saben muy bien que en otro caso recibirían un rechazo absoluto de la casi totalidad de la opinión pública.

Solución pacífica

La decisión de afirmar sus intereses y buscar soluciones en una vía pacífica de desarrollo nacional es común a las diferentes clases sociales y a los más importantes estamentos de la sociedad. El hecho de que los representantes más calificados y los dirigentes institucionales de los gremios de la producción: industriales, comerciantes, empresarios agrícolas; al mismo tiempo que las organizaciones sindicales, la iglesia, todos los partidos políticos legales y representantes de algunos movimientos guerrilleros se hayan unido para ofrecer su apoyo a una solución pacífica de nuestros

conflictos y hayan manifestado inequívocamente su voluntad permanente de colaborar en ella; este hecho y muchos otros, como la participación en la elección popular de alcaldes y en las juntas regionales de rehabilitación, demuestran por sí solos que Colombia se encuentra muy lejos de las condiciones de polarización social que caracterizan los períodos que preceden a las situaciones insurreccionales o pre-revolucionarias.

Las acciones violentas de derecha y de izquierda que desnaturalizan las instituciones democráticas colombianas —la libertad de asociación y participación política, la libertad de asociación sindical, de prensa, de cátedra, etc— son ejercidas por grupos minoritarios, que no representan ni pueden canalizar grandes sectores de clase o grupos importantes de la población.

La fuerza del mito

Con estas observaciones sólo queremos hacer un diagnóstico realista y no minimizar la gravedad y la peligrosidad de la violencia que azota a nuestro país. Queremos insistir en esto porque en la historia no sólo cuentan los procesos objetivos, económicos, tecnológicos, demográficos, etc, sino también y en gran medida las representaciones que de estos procesos se hacen los actores sociales, por ilusorias que sean y que con frecuencia determinan su acción. Lenin decía que los hechos son tozudos, pero con su determinismo económico solía olvidar que los mitos y las interpretaciones erradas pueden ser igualmente tozudos y por las formas de actividad y los tipos de confrontación a que dan lugar, deciden muchas veces el curso de los acontecimientos. Un ejemplo alarmante de esta eficacia de la equivocación

en la historia lo dió el partido comunista alemán y en general la tercera internacional, cuando dedujeron de sus análisis que Hitler no era un peligro real y que el verdadero enemigo era la socialdemocracia.

Sicología conspirativa

Es nuestro caso, uno de los obstáculos mayores para llegar a soluciones políticas procede de una interpretación ilusoria o alarmista —según el caso— de la compleja gama de violencias entreveradas que padecemos. La extrema izquierda tiende con frecuencia a pensar que nos encontramos al borde de una situación insurreccional o prerrevolucionaria y que en consecuencia debe estar preparada militarmente para afrontarla y tratar de "agudizar los conflictos" en lugar de buscar salidas "reformistas". Un ejemplo característico de este enfoque se presentó en el plenum de las FARC de octubre de 1983. Allí un dirigente de este grupo planteó la tesis de que nadie debe dejarse engañar por la idea de que es posible en Colombia una apertura hacia la democracia burguesa y propuso nada menos que un plan militar de ocho años, en el cual, cuando estén dadas las condiciones organizativas, políticas y militares, comience su despliegue estratégico en dos fases, se combine con la acción insurreccional en las grandes ciudades, de suerte que se consolide la posición estratégica necesaria para proclamar un gobierno revolucionario provisional. Entre tanto la acción consistirá en emboscadas, tomas de pueblos y participación en paros cívicos y marchas campesinas.

Este tipo de interpretaciones de nuestra realidad social y algunas otras de origen castrista o maoísta que todavía sobreviven

→

→ en varios movimientos guerrilleros, se parecen curiosamente a las que son propias de la extrema derecha, la cual por su parte se siente también ante la amenaza de una insurrección inminente, derivada en su perspectiva de un gran complot comunista, agenciado desde Moscú y La Habana y del que hacen parte no solamente los grupos armados, sino todos los movimientos de protesta y reivindicación y las manifestaciones de crítica e inconformidad, por lo cual están dispuestos a lanzarse a una gran cruzada contrarrevolucionaria a escala de toda la sociedad y por todos los medios.

Errores encarnados

El gran problema que plantean estas interpretaciones típicas, es que no se trata de simples equivocaciones en la mente de algunos sujetos, sino, por decirlo así de errores encarnados que poseen su eficacia propia, se alimentan recíprocamente, y obstaculizan

seriamente el proceso de una solución política de los conflictos.

Por parte de la izquierda dificultan los acuerdos que conduzcan realmente a una desmovilización; llevan a una sobrevaloración imaginaria de su fuerza efectiva y correlativamente de las exigencias que plantea para aceptar el paso a la lucha política legal. Además, semejante desenfoque tiende a desnaturalizar y a hacer abortar los movimientos populares que se proponen reivindicaciones concretas y precisas, tratando de llevarlos más allá de sus propósitos hacia confrontaciones globales o violentas con el sistema institucional en su conjunto.

Por parte de la derecha descartan toda solución que no sea la liquidación pura y simple del adversario; confunden en un mismo movimiento subversivo las más diversas formas de lucha social, incluida la oposición política legal y la crítica ideológica y sitúan en el campo enemigo todo lo que impida la contrarrevolución "por to-

dos los medios" como las garantías democráticas y la vigencia de los derechos humanos.

Una lucha anacrónica

Afortunadamente estas concepciones extremistas se encuentran hoy en franca decadencia, en parte por la evolución de la situación mundial, en la cual se está erradicando el espíritu de la guerra fría y casi todos los conflictos armados resultan cada vez más estériles y destructores y se están resolviendo uno tras otro por medio del diálogo y las concesiones mutuas. En parte también porque en el interior del país ninguno de los adalides de la polarización ha logrado imponer una visión apocalíptica a sectores importantes de la población.

Esta evolución tanto mundial como nacional, que no parece reversible, ha llevado a varios de los sectores de la izquierda, incluso dentro del movimiento guerrillero a comprender que su tipo de lucha es completamente anacrónico en las circunstancias objetivas de nuestro país y extraño a las aspiraciones de la casi totalidad de su población.

Por la democracia, más democracia

Son estas condiciones y estas tendencias las que confieren un carácter realista al propósito de paz del gobierno y permiten que se imponga progresivamente su tesis de que la democracia colombiana, tan gravemente amenazada por las diversas formas de violencia, sólo puede defenderse y consolidarse con más democracia, con una democracia más amplia y más participativa. Nadie puede negar que muchas de las conquistas políticas recientes; como el nuevo régimen municipal y muchos de los artículos de la re-



Cocadólares, un poder corruptor en la guerra política.



forma constitucional, aprobada en primer debate, van en este sentido.

Desde luego que el proceso de paz será complejo y deberá cumplir etapas y ajustarse a condiciones precisas, para que sea verdaderamente sólido; pero cualquiera otra solución al conflicto político armado resultaría demasiado costosa en todos los sentidos, y significaría casi con seguridad una regresión en el desarrollo democrático del país.

La desmovilización del movimiento guerrillero —o al menos de sus principales componentes— no significaría por supuesto una superación de todas las formas de violencia que hay en Colombia, pero sería un paso decisivo hacia la liquidación de las que más directamente amenazan el sistema democrático y dificultan la vigencia de los derechos humanos.

La guerra turbia

En efecto, la violencia de los grupos paramilitares, que está muy lejos de ser simplemente autodefensiva —como ellos y sus partidarios lo proclaman— toma pretexto casi siempre en los supuestos (y a veces reales) vínculos de diferentes movimientos, organizaciones populares y partidos de oposición con las guerrillas, y también, en la dificultad de la fuerza pública para proteger a diversos sectores de la población, contra los métodos cada vez más francamente delictivos de financiación del movimiento subversivo como son el secuestro, la extorsión, la vinculación con el negocio del narcotráfico, el asalto a poblaciones y el robo a entidades como la Caja Agraria.

La suspensión de todos estos delitos que han llegado a ser el medio fundamental de financiación de los grupos guerrilleros y que en la actual política de paz es

un prerrequisito para su desmovilización y vinculación a la lucha política legal, haría mucho más fácil el desmonte de los grupos paramilitares de extrema derecha, lo que a su turno permitiría aislar la delincuencia común, organizada o no. Esta última, principalmente el narcotráfico, está ligada con la violencia política de manera muy íntima. Lo está en las zonas lejanas de colonización donde ciertos guerrilleros han tratado de controlar y aprovechar los cultivos de coca que realizan decenas de miles de colonos.

Combate colectivo al narcotráfico

El narcotráfico, con sus inmensos recursos económicos es, sin lugar a dudas, uno de los factores que más profundamente han incidido en el desarrollo de todas las formas de violencia que padece nuestra población. No sólo directamente, sino por su poder de corrupción y de intimidación sobre los más diversos estamentos, institucionales y capas de la sociedad, y por su poder para desestabilizar el aparato judicial. La lucha contra este flagelo es una tarea muy difícil y compleja. Colombia ha planteado en diversos foros internacionales la necesidad de dar un combate colectivo a este expresión delincuencia y este planteamiento tiene cada vez más aceptación. En nuestro caso este combate —que en todas partes se justifica por sí mismo— hace parte además de una estrategia global para enfrentar el problema más grave que tenemos: la violencia en sus múltiples manifestaciones.

Hacia una cultura de la convivencia

Otro elemento central de la mencionada estrategia es el fortalecimiento de la justicia, para lo

cual se han planteado varias reformas y se han tomado medidas como la creación del Cuerpo Técnico de la Policía Judicial, lo que ha comenzado a dar resultados en la lucha contra uno de los aspectos más graves —causa y efecto a la vez— de la violencia colombiana como es la impunidad. La voluntad recientemente demostrada de entablar diálogos directos con todos los grupos que manifiesten en las palabras y los hechos una decisión efectiva de paz; los trabajos del Plan Nacional de Rehabilitación, de erradicación de la pobreza absoluta y las tareas emprendidas por la Consejería para la Defensa, Protección y Promoción de los Derechos Humanos, constituyen elementos diferentes pero estrechamente coordinados de una misma batalla por la paz. Si se tratara del programa más o menos improvisado de un gobierno relativamente aislado, la salida sería bastante dudosa, porque no puede negarse que estamos viviendo una de las crisis más graves de nuestra historia. Pero se trata de llevar a la práctica el anhelo de la casi totalidad del pueblo colombiano: construir el desarrollo en una democracia más amplia y participativa. Forjar una cultura del respeto y la convivencia. Por eso pensamos que quienes van a quedarse cada vez más solos y más reducidos a la impotencia son los que con sus propósitos y sus actos, se opongan a ese gran anhelo.